



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

**Asunto:** Conciliación Prejudicial  
**Convocante:** Edgar Demetrio Rosas Cañón  
**Convocado:** Caja de Retiro de las Fuerzas Militares —CREMIL—  
**Radicación:** 15001 3333 004 **2019 00219 00**

### I. ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes el día 25 de noviembre de 2019, ante la Procuraduría 177 Judicial I para Asuntos Administrativos de Tunja.

### II. ANTECEDENTES

El señor Edgar Demetrio Rosas Cañón, a través de apoderado judicial, presentó solicitud de conciliación prejudicial con el fin de obtener el reajuste de la asignación de retiro, con fundamento en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE, para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

### III. TRÁMITE PROCESAL.

La solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 30 de septiembre de 2019, y correspondió a la Procuraduría 79 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá, quien la remitió por competencia, siendo asignada por reparto a la Procuraduría 177 Judicial I para Asuntos Administrativos de Tunja, quien la inadmitió, mediante auto de 21 de octubre de 2019 (f. 25).

Subsanados los defectos señalados, la solicitud se admitió, mediante auto de 25 de octubre del año que avanza (f. 37), y la respectiva audiencia de conciliación se realizó el 25 de noviembre de la misma anualidad (fs. 55 y ss).

### IV. ACUERDO CONCILIATORIO

La fórmula propuesta por la entidad convocada, se contrae a los siguientes términos:

*“PRIMERO: Capital se reconoce en un 100%; SEGUNDO: Indexación. será cancelada en un 75%, TERCERO: El pago se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir de la solicitud de pago; CUARTO: No habrá lugar la pago de intereses dentro de los seis (6) meses siguientes a la solicitud de pago; QUINTO: Costas y agencias en derecho: Considerando que el proceso termina con la conciliación las partes acuerdan el desistimiento de este concepto. Salvo el caso que las audiencias de conciliación en la Procuraduría General de la Nación (sic);*

*SEXTO: El pago de los anteriores valores estará sujeto a la prescripción cuatrienal; SÉPTIMO: Los valores correspondientes al presente acuerdo conciliatorio se encuentran señalados en la liquidación que se anexa a la presente certificación.*

*Bajo estos parámetros se entiende que la conciliación es total...; de igual manera mediante memorando 211-499 del 25 de noviembre de 2019, se relacionó la liquidación correspondiente al mayor EDGAR DEMETRIO ROSAS CANON, reajustada a partir del 15 de octubre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2004 (más favorable) valor capital al 100% \$18.116.720 pesos, valor indexado 75% \$1590.880 pesos, para un valor total a pagar de \$19.707.600 pesos, incrementando su asignación de retiro para el 2019 en \$268.961 pesos, quedando su nueva asignación de retiro reajustada a futuro en \$3.269.470 pesos... ” (f. r55).*

A su turno, la parte convocante aceptó la propuesta presentada por la apoderada de la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares.

Por último, la representante del Ministerio Público señaló que, a su juicio, el acuerdo conciliatorio contenía obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo modo y lugar de su cumplimiento, pues cumplía con los requisitos establecidos por la ley para su procedencia y, adicionalmente, no resultaba lesivo para el patrimonio público (fs.55-57).

## V. CONSIDERACIONES

Tratándose de asuntos de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la ley prescribe que pueden conciliar, total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer esta jurisdicción, a través de los medios de control de reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales<sup>1</sup>.

El inciso final del art. 73 de la Ley 446 de 1998, que adicionó el art. 65 A de la Ley 23 de 1991, respecto a la aprobación de un acuerdo conciliatorio establece lo siguiente:

*“La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público”.*

De esta norma se desprenden unos presupuestos para la aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio, y serán examinados por el Despacho, en el siguiente orden:

1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81 Ley 446 de 1998).

<sup>1</sup> Tribunal Administrativo de Boyacá: MP. Clara Elisa Cifuentes Ortiz: 17 de mayo de 2017.

2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 Ley 23 de 1991 y 70 Ley 446 de 1998).
3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.
4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65 A Ley 23 de 1991 y art. 73 Ley 446 de 1998).

## **VI. DEL CASO CONCRETO**

### **1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad**

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo, cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas.

Ahora, el acuerdo que se revisa tiene como objeto la reliquidación y pago de la asignación de retiro devengada por el convocante con fundamento en el IPC, para el tiempo comprendido entre los años 1997 a 2004, por tanto, al tratarse del reajuste de una prestación periódica, el medio de control no está sujeto a ningún término de caducidad.

### **2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes.**

El señor Edgar Demetrio Rosas Cañón, mediante petición escrito radicado el 30 de enero de 2018, solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares —CREMIL— reajustar su asignación de retiro con fundamento en la variación del índice de precios al consumidor para los años 1997 a 2004 y, en consecuencia, pagar las diferencias causadas entre las mesadas reconocidas y las que debió percibir con la aplicación de este aumento.

CREMIL, a través de oficio N.º 690 de 9 de febrero de 2018, informó que frente a esta clase de solicitudes, la entidad decidió tomar una línea de acción consistente en conciliar los reajustes extrajudicialmente, por lo que debía solicitar conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se surtiera el control de legalidad y luego realizar los pagos respectivos; directriz que la parte solicitante acató, correspondiéndole el conocimiento del asunto a la Procuraduría 177 Judicial I para Asuntos Administrativos de Tunja.

A su turno, la entidad convocada propuso como fórmula conciliatoria al convocante, el pago del 100% del capital, el 75% de la indexación y que no se generen intereses durante los 6 meses siguientes a la solicitud de pago.

Al respecto, es de resaltar que disposición legal no hay lugar a conciliar derechos ciertos e indiscutibles; sin embargo, esto no significa que no se pueda acudir a este mecanismo para lograr su reconocimiento, comoquiera que en el evento de presentarse una conciliación entre las partes donde el acuerdo conciliatorio comprenda entre otras cosas, la totalidad del derecho cierto e indiscutible, perfectamente puede ser avalado o aprobado en sede judicial, ya que no ha sido menoscabado<sup>2</sup>.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que en el acuerdo bajo estudio, se protegió el derecho prestacional reclamado, pues la entidad estatal reconoció el 100% del capital, equivalente a \$18.116.720, luego, no se menoscabaron derechos ciertos, irrenunciables e indiscutibles del convocante, por tanto, el acuerdo debe tenerse como válido, máxime, que el arreglo recayó sobre la indexación y los intereses moratorios, conceptos que por ser carácter económico y de contenido particular, son disponibles por las partes.

**3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.**

El señor Edgar Demetrio Rosas Cañón se encuentra representado judicialmente, por el abogado Cristian Daniel Rosas Ayala, según poder obrante a folio 8 del expediente, con facultad expresa para conciliar, a quien se le reconoció personería para actuar, mediante auto de 25 de octubre de 2019 (f. 37).

La entidad demandada se encuentra debidamente representada a través de la abogada Liliana Fonseca Salamanca, según poder conferido por el jefe de la Oficina Jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares, delegada por el Comité de Conciliación con expresa facultad para conciliar, a quien le fue reconocida personería para actuar en la diligencia de 25 de noviembre de 2019 (f 55).

En este orden, las partes se encontraban debidamente representadas y facultadas para participar en la audiencia de conciliación celebrada el 25 de noviembre de 2019.

**4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público.**

En el expediente obran los siguientes medios de prueba:

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda. Subsección B, en la Sentencia del 14 de Junio de 2012, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve

- Solicitud de conciliación previa, en la que funge como convocante el señor Edgar Demetrio Rosas Cañón (fs. 2 -7).
- Poder otorgado por el convocante (f. 8).
- Copia de la Resolución N.º 2767 de 29 de agosto de 2001, por medio de la cual se reconoció asignación de retiro al convocante (f. 9-10).
- Petición radicada por el accionante el 30 de enero de 2018 ante CREMIL, por medio de la cual solicitó el reajuste de su asignación con aplicación del IPC (fs. 11-12).
- Oficio N.º 690 de 09 de febrero de 2019, por medio del cual la entidad convocada señaló al apoderado del señor Rosas Cañón que debía solicitar conciliación prejudicial (f. 13)
- Certificación expedida por CREMIL en la que constan los porcentajes de incrementos anuales reconocidos a los oficiales en el grado de mayor para los años 2001 a 2004 (f. 14).
- Certificación en la que se indica que el último lugar de prestación de servicios del solicitante fue el Batallón de Infantería N.º 3 “Batalla de Bárbula” Puerto Boyacá –Boyacá (f. 16).
- Certificación de la variación anual del IPC desde 1997 a 2004, emitida por el DANE (f. 43-44).

Con sustento en lo anterior, el Juzgado encuentra acreditados los hechos narrados en la solicitud de conciliación, en tanto permiten advertir que la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció asignación de retiro al señor Edgar Demetrio Rosas Cañón, efectiva a partir del 15 de octubre de 2001.

Ahora, con fundamento en la certificación expedida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, donde consta el incremento hecho a la asignación reconocida al convocante, se realiza el siguiente cuadro comparativo, en el que se toman los reajustes realizados y los que se debieron efectuar tomando en cuenta el IPC del año anterior:

DIFERENCIA ENTRE SALARIOS FIJADOS POR OSCILACIÓN E IPC			
Años	Incremento realizado	IPC año anterior	DIFERENCIA
2002	4,93 %	7,65%	-2.72%
2003	5,61 %	6,99%	-1,38%
2004	5.07 %	6,49%	-1,42%

Así, entonces, se encuentra acreditado que los reajustes efectuados a la asignación de retiro del accionante para los años 2002, 2003 y 2004, fueron inferiores a la variación del IPC certificada por el DANE para el año inmediatamente anterior.

#### 4.1. De la no afectación al patrimonio público.

Con relación a este aspecto, el Consejo de Estado ha expresado que:

*“(…)*

*En tratándose de materias administrativas contenciosas para las cuales la ley autoriza el uso de este mecanismo, dado el compromiso del patrimonio público que les es inherente, la ley establece exigencias especiales que deben tomar en cuenta el juez a la hora de decidir sobre su aprobación.*

*Entre dichas exigencias, la Ley 446 de 1998, en el último inciso del art. 73, prescribe que el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en “las pruebas necesarias” que permitan deducir una alta probabilidad de condena contra el Estado-en el evento de que el interesado decidiese ejercitar las acciones pertinentes-, de modo tal que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público o violatorio de la Ley (...)”<sup>3</sup>.*

Así las cosas, debe recordarse que a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995<sup>4</sup>, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993, tienen derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, cuando este resulte más favorable; por consiguiente, es viable reconocer este derecho a miembros retirados de la Fuerza Pública o sus beneficiarios, pero solo hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 — 31 de diciembre de 2004—, que una vez más estableció el principio de oscilación para el incremento de las asignaciones de retiro y pensiones<sup>5</sup>.

Siendo del caso precisar que, con ocasión de la aplicación del IPC, se modifica la base pensional, lo que incide en los pagos futuros, por lo que el reajuste de años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, debe servir de base para los incrementos que se afecten a partir del 2005, en virtud del principio de oscilación, aplicando, en todo caso, el fenómeno jurídico de la prescripción.

De acuerdo con lo expuesto, puede inferirse una alta probabilidad de condena de la entidad convocada y que un proceso judicial implicaría gastos mayores con cargo al patrimonio de la entidad demandada, con el consecuente desgaste del aparato jurisdiccional

<sup>3</sup>Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. CP Dr. Alíer Eduardo Hernández Enríquez. Expediente No. 85001233100020030009101. veintinueve (29) de enero del dos mil cuatro (2004).

<sup>4</sup> “**ARTÍCULO 1o.** Adiciónese al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente párrafo:

*“Párrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados”.*

<sup>5</sup> Consejo de Estado, en Sentencia del Veintisiete (27) de Enero de Dos Mil Once (2011).- Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00141-01(1479-09), C.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja,

**RESUELVE:**

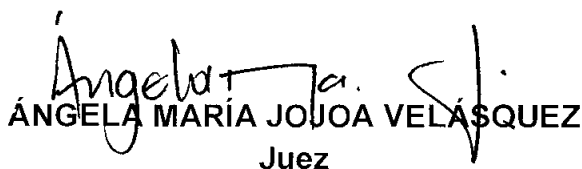
**PRIMERO.- Aprobar** el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor Edgar Demetrio Rosas Cañón y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares —CREMIL—, contenido en el acta de conciliación de 25 de noviembre de 2019, ante la Procuraduría 177 Judicial I para Asuntos Administrativos de Tunja, en el entendido de que:

- La Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares reajustará la asignación de retiro del convocante, incremento que para el 2019 corresponderá a doscientos sesenta y ocho mil noventa y un pesos (\$268.961), quedando la nueva asignación de retiro en tres millones doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos (\$3.269.470).
- La convocada pagará al señor Edgar Demetrio Rosas Cañón, identificado con c. c N.º 79.356.462 de Bogotá, dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la solicitud de pago, las sumas de dieciocho millones ciento dieciséis mil setecientos veinte pesos (\$18.116.720), correspondiente al 100% del capital y de un millón quinientos noventa mil ochocientos ochenta pesos (\$1.590.880), correspondiente al 75% de la indexación, para un total de diecinueve millones setecientos siete mil seiscientos pesos (\$19.707.600).
- Dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de pago no se generaran intereses moratorios.

**SEGUNDO.-** En firme la presente providencia, expídanse copias auténticas de la misma y del acta de conciliación respectiva, con destino a las partes, de conformidad al artículo 114 del CGP, en los términos del Acuerdo PSAA16-100458 de 12 de febrero de 2016.

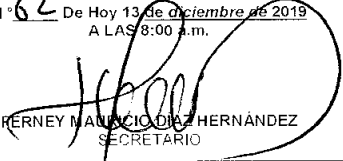
**TERCERO.-** Ejecutoriado el presente auto, archívese el expediente con las constancias y anotaciones de rigor.

**Notifíquese y cúmplase**

  
**ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ**  
Juez

<sup>6</sup>CZ

<sup>6</sup> Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 13 de diciembre de 2019 en la página web [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co). Ferny Mauricio Díaz Hernández – Secretario.

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL  
CIRCUITO DE TUNJA  
NOTIFICACIÓN POR ESTADO  
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO  
ELECTRÓNICO  
N° 62 De Hoy 13 de diciembre de 2019  
A LAS 8:00 a.m.  
  
HERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO